

RV: CONTESTACION REFORMA RAD 202100268

Paola Andrea Guzmán Carvajal <paoguzmancar@hotmail.com>

Miércoles 14/06/2023 4:04 PM

Para: Juzgado 11 Laboral - Valle Del Cauca - Cali <j11lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; servintegralesltda21@hotmail.com <servintegralesltda21@hotmail.com>; Laura Katherine Miranda Contreras <notificacionesjudiciales@porvenir.com.co>; Buzón Procesos Judiciales <procesosjudiciales@colfondos.com.co>; Zulma Yuli Tombé <ztombe@mejiayasociadosabogados.com>; Mejía y Abogados Asociados gmail - Colpensiones <mya.acpensiones@gmail.com>; Maria Juliana Mejía (MyA) <subgerencia@mejiayasociadosabogados.com>

 1 archivos adjuntos (185 KB)

LUZ MARY REYES SILVA - CONTESTACION REFORMA.pdf;

Señor

OSWALDO MARTINEZ PEREDO

JUEZ ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

E. S. D.

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE REFORMA DEMANDA

DEMANDANTE: LUZ MARY SILVA REYES C.C. 20738466

**DEMANDADO: Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES-
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR
S.A.**

RADICACIÓN: 76001310501120210026800

PAOLA ANDREA GUZMAN CARVAJAL, abogada en ejercicio, identificada como aparece en el memorial allegado en el presente proceso, en mi calidad de apoderada sustituta de la Administradora Colombiana de Pensiones en adelante COLPENSIONES, cordialmente me permito allegar contestación a la reforma de la demanda.

Así mismo me permito indicar que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto 806 de 2020, simultáneamente se efectuó envío de la contestación de la reforma de demanda, a la dirección de correo electrónico indicada por la parte demandante en el libelo introductorio de demanda para efectos de notificaciones, esto es al correo electrónico del apoderado: servintegralesltda21@hotmail.com

Fondo de Pensiones PORVENIR S.A.: notificacionesjudiciales@porvenir.com.co

Fondo de Pensiones COLFONDOS S.A.: procesosjudiciales@colfondos.com.co

Cordialmente,

Paola Andrea Guzmán Carvajal
Abogada Especialista en Derecho Administrativo
Tel: 3167101689

2021_9829320

Señor
OSWALDO MARTINEZ PEREDO
JUEZ ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
E. S. D.

REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO: CONTESTACIÓN DE REFORMA DEMANDA
DEMANDANTE: LUZ MARY SILVA REYES C.C. 20738466
**DEMANDADO: Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES-
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
PORVENIR S.A.**
RADICACIÓN: 76001310501120210026800

PAOLA ANDREA GUZMAN CARVAJAL, abogada en ejercicio, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de apoderada sustituta de la Administradora Colombiana de Pensiones en adelante COLPENSIONES, cordialmente solicito al Despacho reconocerme personería para actuar de acuerdo al poder de sustitución adjunto y estando dentro del término de la oportunidad procesal, de manera respetuosa me permito dar contestación a la demanda propuesta dentro del proceso de la referencia instaurado contra mi representada, para que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se absuelva a mi representada de todas y cada una de las pretensiones propuestas en la demanda y se condene en costas a la demandante.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO

La Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- es una empresa industrial y comercial del estado del orden nacional, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005 modificadorio del artículo 48 de la constitución Política, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle. La representación legal la ejerce el Doctor **JAIME DUSSAN CALDERON**, o quien haga sus veces.

El domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 10 No. 72-33 Torre B piso 11, número telefónico 2170100.

PRONUNCIAMIENTO EXPRESO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

De conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 31 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, procedo a dar contestación de la demanda dentro de los siguientes términos:

AL PRIMERO: ES CIERTO que la demandante nació el 09 de agosto de 1965, de conformidad a la documentación allegada con el escrito de demanda.

AL SEGUNDO: ES CIERTO que la demandante ya cumplió los 55 años de edad para el momento de la solicitud traslado de régimen pensional, de conformidad con la documentación allegada en el escrito de demanda.

AL TERCERO: NO ME CONSTA que la demandante se vinculara con el empleador Milfruit Ltda., en la fecha señalada, puesto que desconoce mi representada el presunto contrato a través de la cual se vincula la actora, ahora bien, debe indicarse que sí presenta cotizaciones al RPMD, conforme se observa en la historia laboral emitida por mi representada y que se aporta al proceso.

AL CUARTO: NO ME CONSTA que la demandante estuvo vinculada a COLFONDOS S.A. hasta el día 31 de marzo de 1997, contando con un total de 47.15 semanas, por cuanto ello obedece a un hecho ajeno a mi representada que deberá ser acreditado por la parte demandante.

AL QUINTO: NO ME CONSTA que, a partir de abril de 1996, la demandante se trasladó al RAIS administrado por PORVENIR S.A., por cuanto ello obedece a un hecho ajeno a mi representada que deberá ser acreditado por la parte demandante.

AL SEXTO: NO ME CONSTA que la actora al trasladarse al RAIS, contara con un tiempo aproximado de 470 semanas cotizadas al RPMD, el mismo deberá ser acreditado en el transcurso del proceso.

AL SEPTIMO: NO ME CONSTA que la demandante cuenta con un tiempo aproximado de 25 años cotizados al SGP, en el RAIS, por cuanto ello obedece a un hecho ajeno a mi representada que deberá ser acreditado por la parte demandante.

AL OCTAVO: NO ME CONSTA que la demandante no recibió ningún tipo de información y asesoría en materia pensional y seguridad social por parte de PORVENIR S.A., sobre el derecho de retracto y proyección de la expectativa pensional en el RAIS, por cuanto ello obedece a un hecho ajeno a mi representada que deberá ser acreditado por la parte demandante.

AL NOVENO: NO ME CONSTA que la demandante ha sido asaltada de buena fe con publicidad engañosa y mal intencionada que suministró PORVENIR S.A., dado que no se le dio una asesoría sobre los beneficios, favorabilidad y desventajas de cada régimen; por cuanto ello obedece a un hecho ajeno a mi representada que deberá ser acreditado por la parte demandante.

AL DECIMO: NO ME CONSTA que los fondos privados no le realizaron simulación pensional ni la proyección de expectativa pensional a la demandante, por cuanto ello obedece a un hecho ajeno a mi representada que deberá ser acreditado por la parte demandante.

NO PUEDE SER CATALOGADO COMO UN HECHO que COLPENSIONES no realizó simulación pensional a la demandante por cuanto ello obedece a apreciaciones subjetivas realizadas por la parte demandante, relacionadas con las pretensiones de la demanda, motivo por el cual no puede catalogarse como un hecho, máxime cuanto para la época de los hechos no se encontraba dicha obligación en cabeza de mi representada.

AL DECIMO PRIMERO: NO PUEDE SER CATALOGADO COMO UN HECHO lo sostenido por el apoderado de la demandante, por cuanto ello obedece a apreciaciones subjetivas realizadas por la parte demandante, relacionadas con las pretensiones de la demanda, motivo por el cual no puede catalogarse como un hecho.

AL DECIMO SEGUNDO: NO PUEDE SER CATALOGADO COMO UN HECHO lo sostenido por el apoderado de la demandante, por cuanto ello obedece a apreciaciones subjetivas realizadas por la parte demandante, relacionadas con las pretensiones de la demanda, motivo por el cual no puede catalogarse como un hecho.

AL DECIMO TERCERO: ES CIERTO que la demandante presentó solicitud ante COLPENSIONES, requiriendo el traslado y nulidad del acto de afiliación de la actora, petición que fue negada por mi representada por cuanto se encuentra inmersa en la prohibición legal prevista por la ley para el traslado entre regímenes.

AL DECIMO CUARTO: NO ME CONSTA que la actora presentó solicitud de nulidad de traslado a PORVENIR S.A., en los términos señalados en el hecho, por cuanto ello obedece a un hecho ajeno a mi representada que deberá ser acreditado por la parte demandante.

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA DEFENSA

A efectos de otorgar contestación en debida forma a la presente demanda, sea lo primero analizar el caso particular de la demandante, teniendo en cuenta que a través de su escrito de demanda pretende declarar la nulidad y/o ineficacia del traslado de régimen pensional, toda vez que en la actualidad se encuentra en el Régimen de Ahorro Individual con solidaridad, expresamente en PORVENIR S.A., por lo que en primer lugar, es preciso señalar que, el literal "b" del artículo 13 la Ley 100 de 1993, expresa:

"La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley."

Por su parte, el literal "e", ibídem, establece: "*<aparte subrayado condicionalmente exequible> <literal modificado por el artículo 2 de la ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> los afiliados al sistema general de pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez"*

De conformidad con los documentos allegados en la demanda, se observa que la actora nació el 09 de agosto de 1965, **por lo que a la fecha cuenta con 58 años, es decir que ya cumplió con el requisito de edad establecido por la ley 100 de 1993, modificada por la ley 797 de 2003,** para tener derecho a la pensión de vejez en el RPM. Es decir, se encuentra inmersa en la prohibición legal prevista por el artículo 2 de la norma precitada para pretender realizar un traslado entre Regímenes pensionales.

De otro lado, es de indicarse que existen plenas manifestaciones en la demanda y soportes probatorios que acreditan que la demandante se vinculó de manera directa a **COLFONDOS S.A. posteriormente a PORVENIR S.A.**, afiliaciones a partir de las cuales se permite vislumbrar la voluntad de la actora de afiliarse al RAIS así como su interés de permanencia en dicho Régimen, por lo que dichos actos de afiliación tienen plena validez conforme lo instituye al Artículo 2 de la Ley 797 de 2003, el cual modificó el literal e) del Artículo 13 de la Ley 100 de 1993.

En ese orden de ideas, y de conformidad con la norma en cita, las afiliaciones de la accionante al RAIS gozan de plena validez, toda vez que la elección de Regímenes es una potestad única y exclusiva del afiliado, facultad restringida por la ley de manera exclusiva cuando al afiliado le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.

Es menester tener en cuenta que el sistema pensional colombiano se divide en dos regímenes de diferente naturaleza: a). el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – (RAIS), y b). el Régimen de Prima Media (RPM). En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad los aportes pensionales se depositan en una cuenta de ahorro individual a nombre de cada afiliado, es decir, éste es dueño de su propia cuenta. Bajo este sistema, la pensión obligatoria se financia con los aportes efectuados por el afiliado y el empleador, más los rendimientos generados. Si el afiliado es trabajador independiente, los aportes los asume él en un 100%. En algunos casos, la pensión obligatoria también se nutre de los subsidios creados por la Ley, es el caso de la Garantía de Pensión Mínima.

Por su parte, en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida los aportes pensionales van a una 'bolsa común'; asimismo, la financiación de la pensión obligatoria cuenta con la garantía de un fondo común de naturaleza pública que se nutre de los aportes pensionales de sus afiliados. Cuando los afiliados se trasladan del Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual, serán portadores de lo que se conoce como bono pensional.

Ahora bien, en cuanto a la carga dinámica de la prueba no puede ser aplicada en forma genérica, sin ninguna ponderación, y en desigualdad de las partes involucradas en un proceso. Sobre el particular, el artículo 167 de la ley 1564 de 2012, precisa:

"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.

La carga dinámica e inversión de la prueba al interior de un proceso judicial exige la igualdad entre las partes con parámetros de buena fe y lealtad procesal. Bajo estas circunstancias el principio "quien alega debe probar" cede su lugar al principio "quien puede debe probar". Para determinar QUIEN es el que puede probar dentro de un proceso judicial la Corte Constitucional ha señalado que depende de cada situación particular."

Así, la sentencia C 086 de 2016 que analizó la constitucionalidad del art. 167 del Código General del Proceso, indicó: "7.4.- En lo concerniente a la configuración de la carga dinámica de la prueba debe decirse que atiende su inspiración teórica, fundada en los pilares de solidaridad, equidad (igualdad real entre las partes), lealtad y buena fe procesal, todos ellos reconocidos en la Carta Política de 1991, donde el principio "quien alega debe probar" cede su lugar al principio "quien puede debe probar". Su ejercicio por parte del juez es, en consecuencia, manifestación de una competencia plenamente legítima bajo el prisma de un Estado Social de Derecho.

Además, agrega con nitidez que "el Legislador facultó a los jueces para evaluar las circunstancias de cada caso y definir si se dan o no los supuestos genéricos para recurrir en ciertos casos a la carga dinámica de la prueba. Esta decisión resulta comprensible y completamente válida, no solo ante la dificultad para anticiparse a nuevas situaciones en una sociedad que presenta vertiginosos cambios –algunos tal vez inimaginables–, sino porque son los contornos de cada situación los que permiten evaluar si la igualdad entre las partes se ha visto o no comprometida y se requiere de la "longa manus" del juez para restablecerla."

En conclusión, con lo señalado hasta ahora, la carga dinámica de la prueba no puede invertirse de una forma arbitraria y sin considerar los aspectos particulares de cada caso debidamente individualizado, tal y como lo precisó la Corte Constitucional en la citada

providencia que reseña "Imponer al juez la obligación de acudir en todos los eventos a la institución de la carga dinámica de la prueba, y no de manera ponderada de acuerdo con las particularidades de cada caso y los principios generales de la Ley 1564 de 2012, significaría alterar la lógica probatoria prevista en el estatuto procesal diseñado por el Legislador, para en su lugar prescindir de las cargas procesales razonables que pueden imponerse a las partes y trasladar esa tarea únicamente al juez."

En este sentido, es importante traer a colación el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala Laboral, en grado Jurisdiccional de Consulta, dentro del proceso 66001310500120170008501, en el cual se resolvió revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar absolver a las demandadas. Dentro del fallo referido consideró el Tribunal lo siguiente: *"Puestas de ese modo las cosas, resulta imprescindible mencionar lo dispuesto en el art. 1604 del C.C. que exige que "la prueba de la diligencia y cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega", no obstante lo anterior, dicha obligación probatoria aparece como respuesta inmediata a alguien que previamente ha alegado el incumplimiento de una obligación por parte de su deudor, en esa medida, quien alega un incumplimiento obligacional deberá probar el supuesto de hecho de la norma que consagra el efecto jurídico perseguido (art. 167 CGP), o en otras palabras, deberá probar la obligación incumplida para que se presuma que ello se dio por culpa de la contraparte, quien en respuesta de tal cuestionamiento tendrá la carga de demostrar la diligencia o cuidado en la obligación pactada."*

Dicho de otra forma, la asesoría brindada por las AFPs debe restringirse a informar a la afiliada de todas y cada una de las características del RAIS frente al RPM, además de su solidez financiera (art. 97 del Decreto 663/1993 y sus modificaciones), sin que dicha información pueda analizarse desde la óptica de un buen o mal consejo, pues ello implicaría usurpar la voluntad del afiliado, única persona que después de conocer las características del régimen podrá sopesar si la escogencia del RAIS resulta adecuada y atractiva para el fortalecimiento de su vida, pues al gozar de capacidad de ejercicio, quien celebra el contrato de afiliación está en condiciones de entender las incidencias de la escogencia a partir de la información que ha recibido.

Decantado lo anterior, es menester resaltar que, en el sub lite no se demuestra vicio en el consentimiento o asalto a la buena fe en el momento en que la demandante se afilia al Régimen de Ahorro Individual administrado **por COLFONDOS S.A., acto seguido a PORVENIR S.A.**, como se alega en la demanda, además para el momento de las afiliaciones era imposible predecir los Ingresos Base de Cotización sobre los cuales cotizaría la demandante en los próximos años, y calcular una futura mesada pensional real en el momento de la afiliación, pues los ingresos económicos podrían variar en relación a los reportados en su Historia Laboral hasta esa fecha.

Adicionalmente, cabe señalar que la afiliación de régimen es un acto libre y voluntario de la afiliada y que las entidades administradoras no deben intervenir en la decisión del afiliado en lo concerniente a la elección del régimen pensional.

Valga señalar que, el Sistema Integral de Seguridad Social en pensiones, instituido en el ordenamiento jurídico colombiano se divide en dos regímenes de diferente naturaleza: a). el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – (**RAIS**), y b). Régimen de Prima Media con Prestación definida (**RPM**). En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad los aportes pensionales se depositan en una cuenta de ahorro individual a nombre de cada afiliado, es decir, éste es dueño de su propia cuenta. Bajo este sistema, la pensión obligatoria se financia con los aportes efectuados por el afiliado y el empleador, más los rendimientos generados. Si el afiliado es trabajador independiente, los aportes los asume él en un 100%. En algunos casos, la pensión obligatoria también se nutre de los subsidios creados por la Ley, es el caso de la Garantía de Pensión Mínima.

Por su parte, en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida los aportes pensionales son girados a un "fondo común"; asimismo, la financiación de la pensión obligatoria cuenta con la garantía de un fondo común de naturaleza pública que se nutre de los aportes pensionales de sus afiliados. Cuando los afiliados se trasladan del Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual, serán portadores de lo que se conoce como bono pensional.

Por tanto, es claro que ambos Regímenes, excluyentes entre sí, comportan sus propias ventajas y desventajas, mismas que son asumidas por los afiliados al momento de efectuar su afiliación, por lo que resulta improcedente y jurídicamente inviable que, se pretendan alegar supuestos vicios en el consentimiento alegando la presunta desventaja que les comportaría recibir una mesada pensional en el RAIS, pues, para que dichas pretensiones pudiesen prosperar, resulta indispensable que la demandante demuestre la pérdida de un tránsito legislativo o la frustración de una expectativa legítima ocasionada por la decisión de trasladarse al Régimen de Ahorro Individual. Pese a lo anterior, de los presupuestos esbozados en la demanda y del material probatorio allegado al plenario, se puede concluir que la demandante conserva la posibilidad de obtener una pensión en el RAIS.

Aunado a lo anterior, la demandante debe demostrar en la demanda la frustración de una expectativa legítima ocasionada por la decisión de afiliarse al Régimen de Ahorro Individual, toda vez que, de permanecer en **PORVENIR S.A.**, entidad en la cual se encuentra vinculada actualmente, conserva su posibilidad pensional, pues podría acceder al reconocimiento y pago de una Prestación Económica por Vejez, tal como se vislumbra a partir del material probatorio aportado al proceso, y de las manifestaciones efectuadas en la demanda.

Ahora bien, a propósito de la obligación de las Administradoras de Pensiones, de suministrar información necesaria a los afiliados o potenciales afiliados y las consecuencias de su omisión, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL 3496 del 22 de agosto del 2018, reiteró lo ilustrado en la Sentencia SL 31989 del 9 de septiembre del 2008, el cual expresó:

"Las administradoras de pensiones hacen parte, como elemento estructural, del sistema; mediante ellas el Estado provee el servicio público de pensiones; tienen fundamento constitucional en el artículo 48 de la Carta Política, que autoriza su existencia, -desarrollado por los artículos 90 y s.s. de la Ley 100 de 1993 - cuando le atribuye al Estado la responsabilidad por la prestación del servicio público, "la dirección, coordinación y control" de la Seguridad Social, y autoriza su prestación a través de particulares.

Las administradoras de pensiones han de estar autorizadas para fungir como tales si cumplen una serie de requisitos que las cualifican, hacen parte del elenco de las entidades financieras, cumplen una actividad que en esencia es fiduciaria y han de ajustar su funcionamiento a los requerimientos técnicos propios para esta clase de establecimientos, pero bajo el entendido de que todos ellos han de estar ordenados a cumplir con la finalidad de prestar un servicio público de la seguridad social.

La doble condición de las administradoras de pensiones, de sociedades que prestan servicios financieros y de entidades del servicio público de seguridad social, es compendiada en la calificación de instituciones de carácter previsional, que les atribuye el artículo 4º del Decreto 656 de 1994, y que se ha de traducir en una entidad con solvencia en el manejo financiero, formada en la ética del servicio público.

Ciertamente las administradoras de pensiones son en esencia fiduciarias del servicio público de pensiones, razón por la cual su comportamiento y determinaciones deben estar orientadas no sólo a alcanzar sus propias metas de crecimiento y beneficio, sino a satisfacer de la mejor manera el interés colectivo que se realiza en cada persona que queda desprotegida por haberse cernido sobre sí una enfermedad o trauma que lo deja inválido, o la muerte sobre el

miembro de la familia del cual depende, o sobre su afiliado cuando le llega el momento de su retiro de la vida productiva por imposición o disfrute de la vejez.

De conformidad a los lineamientos establecidos, no se demuestra entonces hasta el momento que la demandante haya sido engañada al tomar una decisión desfavorable a sus intereses, más aún, cuando ha permaneció en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por muchos años, sin manifestar ninguna inconformidad respecto al desempeño y administración, afianzando su decisión de estar en este Régimen.

Por lo anterior, se tiene que la demandante se encuentra válidamente afiliada al Régimen de Ahorro Individual como se evidencia en la historia laboral aportada con la demanda en la que se refleja que se afilió a **COLFONDOS S.A. y posteriormente a PORVENIR S.A.**, entidades respecto de las cuales no efectuó ningún reproche con miras a acreditar supuestos vicios en el consentimiento al momento de sus vinculaciones sin mostrar inconformidad alguna en la administración de sus cotizaciones al Fondo privado referenciado.

Así mismo y conforme a lo solicitado por el actor, se trae a colación algunos apartes de los lineamientos estatuidos por la entidad de fecha 14 de enero de 2020, en los cuales se indica que:

"El retorno en cualquier tiempo al RPM, faltando menos de 10 años para la edad de pensión debe realizarse atendiendo: (i) las expectativas pensionales del afiliado y (ii) la sostenibilidad financiera."

En la Sentencia C-596 de 1997 la Corte Constitucional estudió una demanda dirigida contra la expresión "al cual se encuentran afiliados" contenida en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la cual se acusó de desconocer el principio de favorabilidad en materia laboral, colocar en situación desventajosa a las personas que se encontraban en el régimen de transición y violar el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales, al respecto la Corte expresó:

"Justamente por cuanto los derechos a la seguridad social no se tienen por el simple hecho de ser persona humana, como si sucede con los derechos fundamentales o derechos de primera generación, para ser titular de ellos es necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos que la ley, de manera general, impone para adquirirlos. Cuando, en vigencia de la ley que señala tales requisitos, estos llegan a cumplirse, se habla de derecho adquirido en materia de seguridad social. Cuando, por el contrario, durante el término de vigencia de la ley que prescribe tales condiciones, la persona que aspira a la titularidad de ellos está en vía de cumplirlas, se habla de expectativa de derecho. (...) Las consecuencias jurídicas en uno y otro supuesto son bien distintas: los derechos adquiridos, al tenor del artículo 58 la Carta Política, no pueden ser desconocidos por leyes posteriores; no así las simples expectativas de derecho."

Posteriormente, a través de la providencia C-789 de 2002, la Corte Constitucional resolvió la demanda presentada por un ciudadano contra los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En la sentencia, la Corte precisó el alcance de derechos adquiridos y meras expectativas en materia pensional, indicando lo siguiente:

"La Sala Plena consideró que las disposiciones demandadas se ajustaban a la Constitución puesto que, en primer lugar, el derecho a obtener una pensión de acuerdo con el régimen de transición no es un derecho adquirido sino "apenas una expectativa legítima, a la cual decidieron renunciar voluntaria y autónomamente, para trasladarse al sistema de ahorro individual con solidaridad".

En segundo lugar, indicó que ni siquiera puede afirmarse que las normas acusadas frustren tal expectativa ya que sólo *"se podría hablar de una frustración de la expectativa a pensionarse en determinadas condiciones y de un desconocimiento del trabajo de quienes se trasladaron al sistema de ahorro individual, si la condición no se hubiera impuesto en la Ley 100 de 1993, sino en un tránsito legislativo posterior, y tales personas se hubieran trasladado antes del tránsito legislativo"*.

Por último, precisó que *"la protección constitucional a favor del trabajador, que le impide al legislador expedir normas que les permitan renunciar a ciertos beneficios considerados como mínimos no se refiere a las expectativas legítimas, sino a aquellos derechos que hayan sido adquiridos por sus titulares o a aquellas situaciones que se hayan consolidado definitivamente en cabeza de sus titulares"*, razón por la cual tal prohibición no aplica en este caso al tratarse de expectativas legítimas y no de derechos adquiridos".

Adicionalmente, las sentencias C-1024 de 2004, y SU-062 de 2010, de la Corte Constitucional en materia de traslados, indican que nadie puede resultar subsidiado a costa de los recursos ahorrados de manera obligatoria por los otros afiliados a este esquema, dado que el régimen solidario de prima media con prestación definida se descapitalizaría.

Así mismo, dentro de la aludida jurisprudencia la Corte recordó que "el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales previstos en la ley no constituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señalamiento de algunas excepciones que, por su misma esencia, pueden conducir al establecimiento de una diversidad de trato".

Como se observa, la Corte Constitucional destacó que el derecho a trasladarse NO es absoluto y debe atender criterios de sostenibilidad financiera y expectativas pensionales. En desarrollo de los fines esenciales del Estado Colombiano, las instituciones que lo conforman deben propender hacia la salvaguarda de los principios y valores constitucionales conforme a lo dispuesto en la Carta Política, la Ley y los Convenios Internacionales suscritos por aquel.

Así las cosas, es menester traer a colación lo consagrado en el Artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, señala:

"El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas."

Por consiguiente, el artículo 48 de la Constitución Política, estableció dos dimensiones de la seguridad social; por un lado, la concibió como un derecho constitucional fundamental; y, por el otro, como un servicio público de carácter obligatorio el cual se debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en aras a la materialización de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, entre otros.

El artículo 334 de la Constitución Política, señala que *"La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica"*, en ese orden de ideas, es necesario que, dando prevalencia al interés general sobre el particular, se tomen las medidas pertinentes en búsqueda de la protección de los recursos que soportan el sistema pensional, conforme a los principios que rigen la Constitución Política, en la medida que el derecho a la seguridad social se encuentra atado al principio de sostenibilidad fiscal y estabilidad financiera del Estado.

En consecuencia, la declaración injustificada de ineficacia de afiliación de una persona vinculada al RAIS afecta la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados.

En esta misma línea se pronuncia la Corte Constitucional en sentencia T- 489 de 2010, al expresar: (...) la Sala se permite destacar dos ideas, relacionadas ambas con la sostenibilidad económica del sistema pensional. Ellas son: a-- La primera tiene que ver con la protección del capital pensional. No se puede permitir "la descapitalización del fondo", si personas que no contribuyeron a su formación, vienen a último momento, cuando les faltan ya menos de 10 años para concretar su pensión de vejez, a beneficiarse de un ahorro comunitario accediendo a una pensión, cuyo pago desfinancia el sistema. b- En segundo término, desde una perspectiva social se contraría la equidad y se abandona el valor de la justicia material, al permitir a personas que no han contribuido a los rendimientos de los fondos pensionales, entren a beneficiarse y a subsidiarse a costa de las cotizaciones y los riesgos asumidos por otras y no por ellas mismas". Debe resaltarse la importancia que en este tema concede la Corte Constitucional a las consecuencias económicas de las diferentes posiciones sobre la sostenibilidad financiera del Sistema.

Así las cosas, el principio de sostenibilidad financiera representa la garantía del derecho fundamental a la pensión de los Colombianos de manera sostenida e indefinida y la posición asumida por la Corte en los fallos relacionados con nulidad o inexistencia del traslado entre regímenes pensionales, quebranta el principio de sostenibilidad financiera, en tanto genera una situación caótica que desvertebra la debida planeación en la asignación y distribución de los recursos del Sistema Pensional, al desconocer la irreductible necesidad de que dichas condenas se cumplan previa la ordenada gestión de los recursos que en la mayoría de los casos no están presupuestados en la medida en que surgen, de manera contingente de la declaración judicial respectiva.

La estabilidad financiera se garantiza en la medida en que el sistema general de pensiones percibe y mantiene, a través de medios jurídicos y financieros, los fondos económicos adecuados que le permitan pagar mes a mes a una mayor cantidad de pensionados y obtener un ahorro para precaver la satisfacción de las pensiones futuras, bajo la permanente orientación de subsanar con urgencia cualquier desventaja contra el bienestar general.

No obstante, en el hipotético caso que el juzgador considere declarar la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS, es menester indicar que hay lugar a reintegrar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES la totalidad de la cotización, es decir: i) Recursos cuenta individual de ahorro, ii) Cuotas abonadas al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, iii) Rendimientos, iv) Anulación de Bonos Pensionales v). Porcentaje destinado al pago de Seguros Previsionales y gastos de administración, principio de sostenibilidad financiera: la financiación y la fiscalidad de la seguridad social La gestión de la seguridad social impone el que deba realizarse a través de una institucionalidad compleja, ordenada como sistema, entre cuyos elementos estructurales está el de los fondos económicos, con lo que se han de proveer los recursos indispensables para cubrir el costo de las prestaciones de protección a los afiliados. por lo tanto, es aconsejable revisar en cada caso lo que perjudicaría al sistema de pensiones.

Lo anterior, en concordancia con la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, esto es, las sentencias CSJ SL1421-2019, CSJ SL17595-2017 y CSJ SL4989-2018, donde se rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989, en la que se dijo:

"Sobre las consecuencias de la nulidad del traslado entre regímenes esta Sala en sentencia SL, del 8 de sep. 2008, rad. 31989, reiterada en varias oportunidades, adoctrinó:

(...)

"La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado."

"Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C."

Así mismo, resulta importante tener en cuenta lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 086 de 2002, Magistrado Ponente CLARA INES VARGAS HERNANDEZ, en la que se ha señalado que: *"para la Corte es claro que el sistema de Seguridad Social en pensiones no tiene por finalidad preservar el equilibrio cuota prestación sino la debida atención de las contingencias a las que están expuestas los afiliados y beneficiarios, además por que el régimen de prestaciones de la seguridad social en pensiones no es un régimen contractual como el de los seguros privados sino, todo lo contrario se trata de un régimen legal de una manera se asienta en el régimen contributivo en el que los empleadores y el estado participan junto a los trabajadores en los aportes que resultan determinantes en la cuantía de la Pensión. De ahí que los afiliados a la seguridad social no ostenten un derecho subjetivo a una cuantía determinada de las pensiones futuras, esto es, las pensiones respecto de las cuales no se ha producido el hecho que las causa"*.

Finalmente, solicito al señor Juez que de **acreditarse en el proceso que la demandante adquirió el estatus de pensionada en el RAIS, o en su defecto, se encuentra percibiendo una pensión por parte de la AFP, se niegue la nulidad y/o ineficacia invocado en las pretensiones de demanda**, ello con base al pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la **sentencia SL 373-2021**, en la cual se moderó el precedente respecto a la posibilidad de materializar los efectos de la ineficacia, esto es, retrotraer las cosas al estado anterior, tratándose de demandantes que ya tienen una situación jurídica consolidada o adquirieron el estatus de pensionados en el régimen de ahorro individual.

Así las cosas, en sentencia SL 373-2021, se señaló:

" Es un hecho acreditado que Cárdenas Gil disfruta de una pensión de vejez desde el año 2008, en la modalidad de retiro programado, a cargo de Protección S.A. Esta circunstancia conduce a la Corte a interrogarse si es posible, bajo el manto de la ineficacia de la afiliación, que el demandante pensionado del régimen de ahorro individual con solidaridad, vuelva al mismo estado en el que se encontraba antes de su traslado al RPMPD.

*Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante) 1, **lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más**, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones*

jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto. (Subrayado y negrilla fuera del texto).

A este respecto, la Corte estableció que, al haberse adquirido la calidad de pensionada, se produce la imposibilidad de retornar al estatu quo ante, es decir, tal condición no puede deshacerse o desaparecerse del plano jurídico, pues ello conllevaría a *"disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto."*

Así las cosas, en la sentencia en mención, se señaló que no es posible revertir ciertos efectos económicos como el deterioro que sufre el capital que ya ha sido objeto de pago a través de mecanismos de financiación como los bonos pensionales y las cuotas partes de entidades contribuyentes, como consecuencia ineludible del pago de mesadas pensionales. En efecto, es irreparable la pérdida de integridad del músculo financiero con que se respalda el pago de la prestación, por lo que forzar a través de una ficción jurídica la vuelta al estado anterior en que se encontraba las cosas, va en detrimento de los recursos de la Seguridad Social, bien sea que provengan de la Nación y/o demás entidades que deben contribuir al financiamiento del pasivo pensional.

Sumado a lo anterior, se torna inviable la realización de los efectos de la ineficacia, por cuanto no es posible cesar los efectos jurídicos de las operaciones, contratos y actos que involucran a terceros como aseguradoras, entidades oficiales e inversiones, que según la modalidad pensional en que se encuentre el actual pensionado, hayan concurrido en la administración y gestión del riesgo financiero, entre otras muchas problemáticas de orden financiero, que ocasionarían un déficit económico entre los actores del Sistema que han confluído en la gestión de los recursos a través de relaciones jurídicas válidamente suscitadas en el mundo jurídico del Sistema General de Pensiones, en cumplimiento de obligaciones y deberes contractuales que ya se encuentran consumados y perfeccionados con las consecuencias de orden legal y financiero que ello acarrea.

Con fundamento en la sentencia **SL 373-2021**, se tiene entonces que no procede la declaratoria de ineficacia y/o nulidad de traslado de régimen pensional, en los casos en que la parte demandante se trate de una persona que ya se encuentre pensionada en el régimen de ahorro individual en cualquiera de sus modalidades o se adquiera el estatus de pensionada así no se encuentre percibiendo la pensión, motivo por el cual, solicito que de acreditarse dicho estatus por parte de la demandante, se niegue la declaratoria de la ineficiencia de su afiliación.

PRONUNCIAMIENTO EXPRESO A LAS PRETENSIONES

DECLARATIVAS

A LA PRIMERA: ME OPONGO a que se declare la nulidad por ineficacia del traslado de la demandante, por cuanto la selección de los regímenes existentes -RAIS Y RPM- es única y exclusiva de la afiliada de manera libre y voluntaria, por tanto, la afiliación realizada por la actora al RAIS a la fecha goza de plena validez. Adicionalmente, es menester tener en cuenta que la demandante se encuentra inmersa en la prohibición legal prevista por el artículo 2 de la ley 797 de 2003, para pretender realizar un traslado entre regímenes pensionales.

Así mismo, es menester indicar que la asesoría brindada por las AFPs debe restringirse a informar a la afiliada de todas y cada una de las características del RAIS frente al RPM, además de su solidez financiera (art. 97 del Decreto 663/1993 y sus modificaciones), sin que dicha información pueda analizarse desde la óptica de un buen o mal consejo, pues ello implicaría usurpar la voluntad de la afiliada, única persona que después de conocer las

características del régimen podrá sopesar si la escogencia del RAIS resulta adecuada y atractiva para el fortalecimiento de su vida, pues al gozar de capacidad de ejercicio, quien celebra el contrato de afiliación está en condiciones de entender las incidencias de la escogencia a partir de la información que ha recibido.

Decantado lo anterior, es menester resaltar que, en el sub lite no se demuestra vicio en el consentimiento o asalto a la buena fe en el momento en que la demandante se afilia al RAIS, administrado por **COLFONDOS S.A. y posteriormente por PORVENIR S.A.**, además para el momento de las afiliaciones era imposible predecir los Ingresos Base de Cotización sobre los cuales cotizaría la demandante en los próximos años, y calcular una futura mesada pensional real en el momento de la afiliación, pues los ingresos económicos podrían variar en relación a los reportados en su Historia Laboral hasta esa fecha.

A LA SEGUNDA: NO ME OPONGO a que se condene a PORVENIR S.A. al valor de las costas y agencias en derecho, por cuanto no es una pretensión dirigida en contra de mi representada.

A LA TERCERA: ME OPONGO a que se condene a COLPENSIONES al pago de costas, expensas y agencias en derecho por cuanto no se evidencia negligencia en el actuar por parte de mi representada, máxime cuando no tuvo injerencia en el traslado realizado por la demandante al RAIS.

A LA CUARTA: ME OPONGO a que se ordene en la sentencia la vinculación y afiliación al RPM, con el 100% de los aportes realizados en el fondo privado, por cuanto al no ser procedente la pretensión principal tampoco lo son las consecuenciales o secundarias.

Al respecto, es dable señalar que la selección de los regímenes existentes -RAIS Y RPM- es única y exclusiva de la afiliada de manera libre y voluntaria, por tanto, la afiliación realizada por la actora al RAIS a la fecha goza de plena validez. Adicionalmente, es menester tener en cuenta que la demandante se encuentra inmersa en la prohibición legal prevista por el artículo 2 de la ley 797 de 2003, para pretender realizar un traslado entre regímenes pensionales.

Así mismo, es menester indicar que la asesoría brindada por las AFPs debe restringirse a informar a la afiliada de todas y cada una de las características del RAIS frente al RPM, además de su solidez financiera (art. 97 del Decreto 663/1993 y sus modificaciones), sin que dicha información pueda analizarse desde la óptica de un buen o mal consejo, pues ello implicaría usurpar la voluntad de la afiliada, única persona que después de conocer las características del régimen podrá sopesar si la escogencia del RAIS resulta adecuada y atractiva para el fortalecimiento de su vida, pues al gozar de capacidad de ejercicio, quien celebra el contrato de afiliación está en condiciones de entender las incidencias de la escogencia a partir de la información que ha recibido.

Decantado lo anterior, es menester resaltar que, en el sub lite no se demuestra vicio en el consentimiento o asalto a la buena fe en el momento en que la demandante se afilia al RAIS, administrado por **COLFONDOS S.A., y posteriormente a PORVENIR S.A.**, además para el momento de las afiliaciones era imposible predecir los Ingresos Base de Cotización sobre los cuales cotizaría la demandante en los próximos años, y calcular una futura mesada pensional real en el momento de la afiliación, pues los ingresos económicos podrían variar en relación a los reportados en su Historia Laboral hasta esa fecha.

A LA QUINTA: ME OPONGO a que se ordene que los aportes pensionales deben ser indexados al momento del traslado, pues al no ser procedente la pretensión principal tampoco lo son las consecuenciales o secundarias.

Al respecto, es dable señalar que la selección de los regímenes existentes -RAIS Y RPM- es única y exclusiva de la afiliada de manera libre y voluntaria, por tanto, la afiliación realizada por la actora al RAIS a la fecha goza de plena validez. Adicionalmente, es menester tener en cuenta que la demandante se encuentra inmersa en la prohibición legal prevista por el artículo 2 de la ley 797 de 2003, para pretender realizar un traslado entre regímenes pensionales.

Así mismo, es menester indicar que la asesoría brindada por las AFPs debe restringirse a informar a la afiliada de todas y cada una de las características del RAIS frente al RPM, además de su solidez financiera (art. 97 del Decreto 663/1993 y sus modificaciones), sin que dicha información pueda analizarse desde la óptica de un buen o mal consejo, pues ello implicaría usurpar la voluntad de la afiliada, única persona que después de conocer las características del régimen podrá sopesar si la escogencia del RAIS resulta adecuada y atractiva para el fortalecimiento de su vida, pues al gozar de capacidad de ejercicio, quien celebra el contrato de afiliación está en condiciones de entender las incidencias de la escogencia a partir de la información que ha recibido.

A LA SEXTA: ME OPONGO a que se condene a COLPENSIONES a otros derechos distintos a los solicitados en la demanda, por cuanto al no ser procedente la pretensión principal tampoco lo son las consecuenciales o secundarias.

Adicionalmente, es menester tener en cuenta que COLPENSIONES no tuvo injerencia en el traslado realizado por la demandante, motivo por el cual no debe ser condenada por pretensión alguna.

A LA SEPTIMA: ME OPONGO a que se condene a COLPENSIONES por los perjuicios sufridos por la demandante, por cuanto al no ser procedente la pretensión principal tampoco lo son las consecuenciales o secundarias.

Adicionalmente, es menester tener en cuenta que COLPENSIONES no tuvo injerencia en el traslado realizado por la demandante, motivo por el cual no debe ser condenada por pretensión alguna.

A LA OCTAVA: NO ME OPONGO a que se reconozca personería al apoderado de la demandante, por cuanto ello no es una pretensión elevada en contra de mi representada.

A LA NOVENA: NO ME OPONGO a que se condene a PORVENIR S.A. y COLFONDOS S.A. a restituir el valor del 16% de las cuotas por concepto de administración de los aportes de la actora, por cuanto no es una pretensión dirigida en contra de mi representada.

A LA DECIMA: NO ME OPONGO a que se condene a COLFONDOS S.A. al valor de las costas y agencias en derecho, por cuanto no es una pretensión dirigida en contra de mi representada.

EXCEPCIONES:

A) INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y COBRO DE LO NO DEBIDO:

Fundamento esta excepción en el hecho de no estar obligada mí representada la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – a aceptar el traslado del régimen de ahorro individual con prestación definida al régimen de prima media, pretendido por la demandante toda vez que no cumple con lo establecido en el artículo 13 de la ley 100 de 1993, razón por la cual mí representada, carece de obligación frente a lo pretendido por el actor en el libelo.

La Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES - no puede hacer otra cosa que ajustarse plenamente a la Ley, en todas las actuaciones administrativas, y en el caso concreto se ciñó de manera rigurosa, exacta y correcta a las disposiciones constitucionales, legales y a los reglamentos de la Institución, por lo tanto no es dable desconocer por vía de Jurisprudencia, tan claras reglas legales sobre prestaciones y obligaciones de las Entidades de seguridad social, que todos los juzgadores están obligados a acatar.

Finalmente, me permito señalar que de acreditarse en el proceso que la demandante adquirió el estatus de pensionada en el RAIS, se niegue la ineficacia del traslado invocado en las pretensiones de demanda, ello con base al pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL 373-2021, en la cual se moderó el precedente respecto a la posibilidad de materializar los efectos de la ineficacia, esto es, retrotraer las cosas al estado anterior, tratándose de demandantes que ya tienen una situación jurídica consolidada o adquirieron el estatus de pensionados en el régimen de ahorro individual.

B) PRESCRIPCIÓN:

Sin implicar confesión o reconocimiento de derecho alguno, propongo en esta excepción la **prescripción general del art. 151 del Código de Procedimiento Laboral** en concordancia con el art. 488 del Código Sustantivo de Trabajo que dice:

"Prescripción. Las acciones que emanan de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se hizo exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero solo por un lapso igual"

C) LA INNOMINADA:

De conformidad con el inciso primero del artículo 306 del CPC, respetuosamente solicito al Señor Juez, se sirva declarar esta excepción de oficio al momento de proferir Sentencia definitiva, frente a que toda situación de hecho o derecho que sea advertida y probada en el transcurso del proceso y que favorezca los intereses de mí representada.

D) BUENA FE:

Es importante resaltar que la buena fe en la labor misional de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – surge precisamente de la estricta aplicación de la Constitución, la Ley y el precedente jurisprudencial que permite conceder o negar prestaciones ajustadas a derecho, mi representado en este caso obró bajo el pleno convencimiento de estar actuando conforme a la Ley, teniendo en cuenta los aspectos fácticos y jurídicos aplicable para la situación particular del demandante.

SOLICITUD CONDENA EN COSTAS

Solicito al Señor Juez, en nombre de mi poderdante, que de ser negadas las pretensiones y condenas y probadas las excepciones de la demanda, la parte demandante sea condenada al pago de las costas y agencias en derecho a favor de Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES, conforme al Artículo 392 del C.P.C.

Además, en el evento de prosperar parcialmente las excepciones propuestas solicito respetuosamente al señor Juez tenga en cuenta al fallar, el Numeral 6 del art. 392 del Código de Procedimiento Laboral que establece: "**ARTÍCULO 392. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas: (...) 6. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.**"

ANEXOS

- Poder general otorgado mediante escritura pública No. 3373 del 03 de septiembre de 2019 de la Notaria Novena (09) del Círculo de Bogotá.
- Sustitución.

NOTIFICACIONES

La suscrita recibirá notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la Calle 5 Norte No. 1N - 95 Tel: 8889161-64 de Cali y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 2213 del 2022, manifiesto que el canal digital a través del cual recibiré notificaciones es: notificacionssl@mejiayasociadosabogados.com:

De Usted señor Juez, respetuosamente;



PAOLA ANDREA GUZMAN CARVAJAL
C.C. No. 1.113.673.467 de Palmira
T.P. No. 295.535 del C. S. J.
ELAB/PAGC
REP/